

El reformismo sin mayorías exige diálogo y limitar las ideologías



LA AGUJA DE MAREAR

Javier Ayuso

Los españoles no perdonarían nunca a los políticos actuales que se desaprovecharan las decenas de miles de millones de euros que entregará o prestará la Unión Europea a nuestro país para ayudar a la reconstrucción. Tras más de un año de crisis, muertes, ruina y sufrimiento, los ciudadanos esperan que los fondos del *Next Generation UE* se utilicen con inteligencia y eficacia para ayudar a quienes más lo necesitan, evitar que las empresas sigan cayendo una tras otra y, lo más importante, emprender las reformas necesarias que aseguren el futuro económico y social de España.

Hasta la fecha, los planes para la reconstrucción de España se están planteando cómo se hace todo en nuestro país: el Gobierno toma decisiones de forma unilateral y sin transparencia, y la oposición las critica. Y todo ello, con una guerra de cifras, medias verdades y mentiras completas que hacen imposible el análisis de la situación. Lo peor es que desde Bruselas nos están vigilando y no van a liberar las ayudas si no se cumplen las condiciones establecidas; entre ellas, figura el máximo consenso entre las fuerzas políticas, económicas y sociales para determinar el rumbo del plan reformista de cada Estado miembro.

La fragmentación del arco parlamentario no puede ser una excusa para no presentar a la UE unos planes de reconstrucción y reformas con el máximo apoyo político, económico y social. La mayoría de nuestros socios comunitarios tienen situaciones similares y están dialogando para establecer los criterios de reparto de las ayudas. Aquí, el Gobierno ha creado un segundo Consejo de Ministros para decidir cómo, cuándo y a quién se entregan los fondos. Algo incomprensible e inaceptable.

El reformismo sin mayorías exige diálogo y acuerdos, basados en limitar al máximo las ideologías y adecuar el reparto de los fondos a las necesidades reales del país; no a las promesas electorales realizadas cuando nadie pensaba que se iba a producir una crisis de la magnitud de la actual. Pretender que los programas de 2019 o los acuerdos para el Gobierno de coalición, en 2020, sigan vigentes, es no entender nada de lo que ha pasado y puede pasar todavía.

Las últimas trifulcas entre el PSOE y Unidas Podemos por el incumplimiento del pacto de coalición muestran hasta qué punto el partido morado es insensible a las nuevas circunstancias. Una situación que exige otros planteamientos, una amplitud mayor de miras y, sobre todo, menos sectarismo. La vicepresidenta Tercera del Gobierno, Nadia Calviño, (que ascenderá a segunda en las próximas semanas), sabe perfectamente cuál es la filosofía del *Next Generation EU* y hasta dónde llegarán las exigencias y condiciones para dar el visto bueno a la entrega de

los fondos. Por eso lleva meses frenando las propuestas de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz para subir otra vez el salario mínimo, derogar por completo la reforma laboral de 2012, no sanear la caja de las pensiones o regular el mercado de alquileres.

Las reformas que exige Bruselas van por otro lado. Se trata de dirigir los 140.000 millones de euros a reestructurar sectores de futuro o reorganizar las cuentas públicas o la normativa que impide mantener el empleo. Además de la transición energética, la Comisión Europea ha indicado a los Estados miembros que hay que actuar sobre las finanzas públicas, el marco laboral, la estructura de las pensiones, la inversión en investigación y desarrollo, la lucha contra la desigualdad, la mejora de los niveles de educación y la reforma de las administraciones públicas para agilizar la actividad económica.

Un consenso mínimo

Todas estas medidas requieren un consenso mínimo entre el Gobierno y el primer partido de la oposición, porque España se juega su futuro y no puede desaprovechar una oportunidad tan grande como la del maná de los fondos europeos. Sin embargo, el acuerdo no se ha producido, sencillamente porque ni siquiera ha habido diálogo. Se

creó una comisión parlamentaria más dedicada al escarapateo político que a discutir las reformas necesarias y luego se presentó un documento al Congreso de los Diputados que el propio Consejo de Estado criticó por falta

de sistemas de control. Una oportunidad perdida.

Y así estamos. El Gobierno debe enviar a la Comisión Europea antes del 30 de abril el plan de reconstrucción que le permita acceder a los fondos europeos. El director de Asuntos Económicos de La Moncloa, Manuel de la Rocha, es el responsable del proyecto y lleva varias semanas de retraso sobre el calendario establecido. La idea era enviar los documentos a Bruselas en el mes de febrero, para dar tiempo a los técnicos comunitarios a analizarlos y aprobarlos entre marzo y abril. De esa forma, la UE podría liberar los primeros fondos durante el segundo trimestre del año. Pero sí, como parece, el Gobierno apura los plazos hasta final de abril, la Comisión se verá sobrepasada por el aluvión de planes de los 27 y las ayudas se retrasarán hasta el verano, como mínimo.

Sea como fuere, España ha vuelto a perder otra oportunidad para avanzar unidos en las reformas imprescindibles para afrontar los nuevos retos del futuro. La ideología ha primado sobre las necesidades del país. Qué lejos quedan las negociaciones para aprobar los Pactos de la Moncloa, en 1977, o la Constitución de 1978; dos de los hitos que hicieron capaces las sucesivas reformas que permitieron a España volver al mundo occidental y competir en libertad, prosperidad e igualdad. No solo están olvidadas, sino que los que lo recuerdan lo hacen para acabar con lo que supuso.

Pretender que siga vigente el pacto PSOE-UP, con la pandemia, es no entender nada